

TATIANA LEMOS SANDIM

TENDENCIAS ACTUALES DE LOS
PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS
MONETARIAS CONDICIONADAS EN
AMÉRICA LATINA

Doctora en Administración Pública y Gobierno - FGV-EAESP
Investigadora del Centro de Estudios en Administración Pública y
Gobierno - CEAPG

TENDENCIAS ACTUALES DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS EN AMÉRICA LATINA

TATIANA LEMOS SANDIM

Desde la década de 1990, asistimos a una difusión notable, sobre todo en América Latina, de Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) (BARRIENTOS, 2013). Los PTMC son intervenciones gubernamentales dirigidas a la reducción de la pobreza que tienen dos objetivos claros. El primero de ellos, a corto plazo, se relaciona directamente con la supervivencia material de las familias beneficiarias a través del acceso a bienes primarios, como alimentación e higiene, viabilizado por medio de la transferencia monetaria. El objetivo a largo plazo expresa la teoría de cambio subyacente a los PTMC y presupone que, con el aumento de stock de capital humano, surgirán condiciones necesarias para el rompimiento del ciclo generacional de reproducción de la pobreza (PASE; CORBO, 2015; ESPÍNOLA; ZIMMERMANN, 2018). El capital humano, a su vez, sería aumentado con la mayor escolarización y la mejora de las condiciones de salud de las personas beneficiadas, sobre todo de los niños y adolescentes. Estos objetivos determinaron que los programas se centraran en las familias más pobres y que tengan niños.

Otro objetivo, menos citado y no menos relevante, se refiere al empoderamiento económico y social de las mujeres, así como la promoción de la igualdad de género. Como contribución al logro de esta finalidad, los recursos financieros se transfieren directamente a las mujeres (TEBALDI; ESSER; DAVIDSEN, 2017).

Cuando surgió este tipo de intervención, muchos fueron los cuestionamientos acerca de su legitimidad, pertinencia y, sobre todo, su capacidad de entregar como resultado la reducción de la pobreza de forma eficiente y efectiva. Pasados 20 años desde el inicio de las primeras intervenciones, algunos de estos cuestionamientos iniciales obtuvieron respuestas adecuadas y perdieron sentido. Contribuyeron a ello las innumerables evaluaciones

realizadas que reiteradamente demostraron los efectos en la reducción de la pobreza inmediata posibilitados por las transferencias de renta a las familias más pobres. A estos estudios se suman otros que demuestran la alta capacidad de focalización de esos programas y el aumento en las matrículas y en la conclusión de años de enseñanza entre niños y adolescentes pertenecientes a las familias beneficiadas.

Por otro lado, la poca capacidad para evidenciar la sostenibilidad de los resultados en la vida de esas mismas familias reitera los cuestionamientos sobre la efectividad de intervenciones de esa naturaleza y, además, plantea el surgimiento de nuevas cuestiones asociadas al futuro de esos programas. La experiencia acumulada con la ejecución de los PTMC así como las transformaciones y crisis sociales, económicas y políticas vivenciadas por los países latinoamericanos en el período reciente contribuyen a la formación de un escenario en el que este nuevo grupo de cuestiones es urgente, señalando que hay poca o ninguna disposición para aguardar el paso de otras dos décadas para que las respuestas sean encontradas. La urgencia también se da por la inclusión de la reducción de la pobreza como uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que prevé la extinción de la pobreza extrema en todo el planeta para 2030.

Alineados con este debate, analizamos en este texto algunas dimensiones de las experiencias de PTMC actualmente en ejecución en América Latina en busca de identificar y analizar las transformaciones más recientes, así como las convergencias y disonancias entre ellas. Se pretende contribuir a la comprensión del momento actual y, sobre todo, señalar algunas tendencias futuras ya visibles en el horizonte.

Para avanzar por los caminos recorridos por los PTMC, comenzaremos con el rescate de los elementos básicos que sintetizan sus orígenes, sus propósitos iniciales y el contexto de su implantación. Para ello, la siguiente sección narra un breve panorama histórico sobre los PTMC en América Latina. En las secciones posteriores, anteriores a las conclusiones, discutiremos las principales dimensiones características de estos programas y las tendencias identificadas en la literatura reciente. En este texto abordaremos cuatro dimensiones que consideramos destacables. La primera de ellas discute la propia existencia de ese tipo de intervención. A partir del análisis de la diseminación y de los cambios recientes, vamos a discutir las tendencias de mantenimiento de estas iniciativas, señalando que todavía

no es posible confirmar cambios sustanciales en términos de volumen de inversión y cobertura, aunque ya se vean algunos cambios en este campo. A continuación, el foco está en las evaluaciones realizadas en estos programas. En esta dimensión, las tendencias señalan la creciente demanda por impactos o resultados sostenibles en la vida de las personas beneficiarias. Las dificultades encontradas en este campo son de varias órdenes y, de acuerdo con nuestra percepción, contribuyen a que otra dimensión gane relevancia en ese contexto. Así, la última sección discute la creciente necesidad de articulación de los PTMC con otras estrategias, con miras a la construcción de soluciones colectivas para la pobreza.

Como estrategia metodológica, recurrimos al levantamiento bibliográfico de las publicaciones más recientes sobre el tema, con énfasis en las publicaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y artículos académicos.

1. UN BREVE PANORAMA HISTÓRICO DE LOS PTMC LATINOAMERICANOS

Los PTMC surgieron en el contexto de una reforma de la agenda social y, con ella, de los programas de reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe (ALC)¹, fuertemente orientados por los principios de racionalización de las inversiones y focalización en los más pobres. La teoría del cambio subyacente presupone que el alivio de la pobreza corriente, el aumento del consumo de los hogares y la creación de condicionalidades son capaces de romper la transmisión generacional de la pobreza (IBARRARÁN et al., 2017).

El fenómeno de la pobreza es una preocupación social desde hace muchos siglos y ha sido objeto de numerosos estudios publicados desde por lo menos el siglo XVI (VIVES², 1992). La pobreza fue gradualmente integrada a las responsabilidades públicas alrededor de ese mismo período y desde entonces ha recibido tratamientos muy variados. Cuando observamos el

1 Actualmente existen programas similares de transferencia monetaria en África, Oriente Medio y Asia.

2 Este autor es considerado uno de los más importantes humanistas españoles. En 1538 escribió un Tratado del Socorro de los Pobres, en el que propuso acciones para la población y también para los gobiernos con la finalidad de extinguir la pobreza. Esta obra es considerada un marco en el rompimiento de la visión de la pobreza asociada a un designio divino, al proponer su inclusión entre los temas sociales.

proceso de implantación de los PTMC y percibimos su ocurrencia simultánea en muchos países de un mismo continente, una de las primeras preguntas que surgen es sobre los porqués de ese movimiento.

Entre los elementos indicativos de esa motivación en la literatura se encuentra la redemocratización de los países latinoamericanos ocurrida, principalmente, a lo largo de las décadas de 1990 y 2000. En ese momento, los gobiernos acogieron la demanda por la inserción en la agenda gubernamental de un sistema de protección social capaz de proteger grupos de personas que estaban completamente al margen del progreso. En este ámbito surgió, entre otras, la temática de la urgencia en la reducción de la pobreza de forma rápida, sostenida y consistente basada en el reconocimiento de su naturaleza política y, luego, como un problema a ser desnaturalizado y evaluado. Esto se dio con la ascensión de las élites reformistas y desarrollistas, en un primer momento, orientadas por el ideario neoliberal (PASE; CORBO, 2015; ESPÍNOLA; ZIMMERMANN, 2018).

Las agencias multilaterales también incluyeron esta cuestión como prioridad y pasaron a incorporar en sus acuerdos con los países latinos la necesidad de implantación de estrategias capaces de mejorar la condición de vida de las familias y de las personas en situación de pobreza; con ello, pasaron a incitar la formulación de políticas públicas en ese campo. Los PTMC pasaron a integrar una agenda estructurada de reformas que tenían como uno de sus propósitos desobligar a los gobiernos de parte de los compromisos asumidos con la población y al mismo tiempo responder a la crisis económica que acentuaba la pobreza entre la población (BARRIENTOS, 2013). De esta agenda formaron parte una serie de atributos, como el estímulo a las privatizaciones y descentralizaciones y la focalización de las acciones como contraposición a la universalización, buscando el direccionamiento de los beneficios para grupos específicos (SOUSA, 2015).

Así, en su diseño, los PTMC contemplaban premisas neoliberales y entendían la pobreza, sobre todo, como un problema de gobernanza que se imponía como obstáculo a los propios modos de producción capitalista (Ibid.; MAGRO; REIS, 2011). En este contexto, el concepto de pobreza adoptado se centró en definiciones que superaban las perspectivas exclusivamente monetaristas, capaces de considerar la pobreza únicamente como insuficiencia de ingresos, incluyendo necesidades no monetarias relevantes, como nutrición, vivienda y asistencia social, presentes en el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas.

La adopción de este modelo de intervención reveló, por un lado, la intención de impedir la reproducción y el agravamiento de condiciones inadecuadas de vida y, al mismo tiempo, demostró el desinterés por el enfrentamiento de las causas de ese fenómeno. Además, la ampliación del concepto de pobreza, muchas veces, se tradujo en la práctica en el aumento del acceso a la educación y salud, que, aunque sea fundamental y sea parte del campo de las garantías de derechos sociales, se presentó a las familias pobres de forma impuesta por medio de condicionalidades que debían cumplirse bajo pena de exclusión del programa (ESPINOLA; ZIMMERMANN, 2018).

Desde 1997, más de 40 iniciativas de transferencia monetaria condicionada y no contributiva fueron implantadas en 19 países latinoamericanos, según informaciones de la Cepal³. La tabla a seguir relaciona estas intervenciones, organizadas por país y por período de funcionamiento. En la última columna, la ausencia del año final denota tratarse de un programa aún vigente.

Tabla 1. PTMC en América Latina por país y período de funcionamiento

País	Programa	Período de funcionamiento
Argentina (AR)	Asignación Universal por Hijo para Protección Social	2009-
	Familias por la Inclusión Social	2005-2010
	Jefas y Jefes de Hogar Desocupados	2002-2005
Bolivia (BL)	Bono Juancito Pinto	2006-
	Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy	2009-
Brasil (BR)	Bolsa Alimentação	2001-2003
	Bolsa Escola	2001-2003
	Bolsa Família	2003-
	Cartão Alimentação	2003 (finalizado)
	Programa Bolsa Verde	2011 -
	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil PETI	1996 -
Chile (CH)	Chile Solidario	2002-2012
	Ingreso Ético Familiar (IEF)	2012 - 2014
	Programa Familias	2014-

3 Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe, División de Desarrollo Social, CEPAL. Disponible en: <https://dds.cepal.org/bdptc/#es>.

País	Programa	Período de funcionamiento
Colombia (CL)	Más Familias en Acción	2001 -
	Red Unidos Ex Red Juntos	2007 -
	Subsidios Condicionados a la Asistencia Escolar	2005-2012
Costa Rica (CR)	Avancemos	2006 -
	Superémonos	2000-2002
Ecuador (EC)	Bono de Desarrollo Humano	2003
	Bono Solidario	1998-2003
	Desnutrición Cero	2011 -
El Salvador (ES)	Programa de Apoyo a Comunidades Solidarias en El Salvador (ex Comunidades Solidarias Rurales o Red Solidaria)	2005 -
Guatemala (GT)	Mi Bono Seguro	2012
	Mi Familia Progresas	2008-2011
	Protección y Desarrollo de la Niñez y Adolescencia Trabajadora	2007-2008
Honduras (HN)	Bono Vida Mejor (ex Bono 10.000 Educación, Salud y Nutrición)	2010 -
	PRAF/BID Fase II	1998-2005
	PRAF/BID Fase III	2006-2009
	Programa de Asignación Familiar (PRAF)	1999-2009
México (MX)	Oportunidades Programa de Desarrollo Humano (ex Progresas)	1997-2014
	Prospera – Programa de Inclusión social	2014 -
Nicaragua	Red de Protección Social	2000-2006
	Sistema de Atención a Crisis	2005-2006
Panamá (PN)	Bonos Familiares para la Compra de Alimentos	2005 -
	Red de Oportunidades	2006 -
Paraguay (PI)	Abrazo	2005 -
	Tekoporã	2005
Perú	Juntos Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres	2005 -
República Dominicana	Programa Solidaridad-	2005 - 2012
	Progresando con Solidaridad	2012 -
Trinidad y Tobago	Targeted Conditional Cash Transfer Program (TCCTP)	2005 -
Uruguay	Asignaciones Familiares - Plan Equidad	2008 -
	Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES)	2005 - 2007
	Tarjeta Uruguay Social (ex-Tarjeta Alimentaria)	2006 -

Fuente: Elaboración propia a partir de la *Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe*, de la CEPAL.

Como se puede observar, en algunos países existió (y aún existe) más de un PTMC en funcionamiento al mismo tiempo, como, por ejemplo, en Brasil (*Programa Bolsa Família* y *Programa Bolsa Verde*), en Bolivia (Bono Juancito Pinto y Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy) y en Ecuador (Bono de Desarrollo Humano y Desnutrición Cero). Otra situación común es ocasionada por el eventual rediseño de la estrategia, con su sustitución por otra bajo nueva denominación. Este movimiento es más visible en Honduras, cuyo programa se reestructuró tres veces hasta alcanzar un formato más sostenible, vigente desde 2008. Circunstancias similares ocurrieron también en México, Chile y Uruguay, con el rediseño de sus intervenciones, buscando su perfeccionamiento.

En ese contexto, Nicaragua se constituye como una excepción. Fue el único país que ya desarrolló PTMC por un período y los encerró sin sustituirlos por otro programa (Red de Protección Social y Sistema de Atención a Crisis)⁴.

En 2013, aproximadamente 137 millones de personas en 17 países de América Latina recibían transferencias monetarias que representaban, en promedio, el 20% del presupuesto domiciliario, pagadas con una inversión promedio del 0,4% del Producto Interno Bruto (PIB) (IBARRARÁN et al., 2017). Los números de la última década demostraban que los resultados a corto plazo se alcanzaban con un relativo éxito. De acuerdo con la CEPAL (2018), la pobreza y la indigencia disminuyeron en la región, aunque no se alcanzaron niveles satisfactorios. En 2002, el 44% de la población en América Latina y el Caribe vivía en situación de pobreza y el 19% en condición de indigencia (o pobreza extrema). En 2014, los porcentuales cayeron al 29% y el 12%, respectivamente.

Sin embargo, en 2016 la incidencia de la pobreza y la extrema pobreza creció en América Latina por primera vez en la última década. En ese año, los indicadores comenzaron a evidenciar un retroceso social también en lo que se refiere a la reducción del ritmo de caída de la desigualdad de ingresos y al aumento de la incidencia de la pobreza entre niños, adolescentes, jóvenes, mujeres y la población rural (CEPAL, 2018) .

4 El país ha desarrollado otras estrategias de reducción de la pobreza, como Hambre Cero, por ejemplo. En este programa, sin embargo, la propuesta era de distribución de insumos para el desarrollo de pequeñas propiedades y no la transferencia monetaria.

Estas cifras evidenciaron la insuficiencia de los sistemas de protección social existentes en la región y, de forma más objetiva, destacaron los límites y el agotamiento de los PTMC como estrategia de reducción de la pobreza, aunque el papel desempeñado por ellos es de fundamental importancia (BARRIENTOS, 2013). La efectividad de los PTMC se vio comprometida en un ambiente de estancamiento o, en algunos casos, de retracción económica e hizo evidente la necesidad de desarrollar nuevos sistemas de protección social, pautados por la reducción de la desigualdad, enfocados en la garantía de los derechos y capaces de proveer protección integral y universal, de forma sostenible (CEPAL, 2018).

2. LA RESILIENCIA DE LOS PTMC EN AMÉRICA LATINA

La década pasada se caracterizó, entre otros avances en el campo social, también como un período de implantación de PTMC en diversos países latinoamericanos. Entre 2005 y 2007, surgió la mayor parte de las iniciativas debutantes en países como Panamá, Colombia y Bolivia, que pusieron en marcha por primera vez programas de transferencia de renta condicionada – hasta los días actuales en funcionamiento. Brasil y México se destacan como pioneros en ese escenario, por haber implantado programas de gran porte, como el Oportunidades y el *Bolsa Familia*. Otros países, sin embargo, lanzaron en la década de 1990 sus primeras intervenciones, como se muestra en la Tabla 1.

Es interesante observar que, aunque con reformulaciones, los PTMC se han consolidado como una estrategia de reducción de la pobreza y, en ese sentido, desarrollado lo que podemos llamar “resiliencia”, ya que ellos han resistido a los choques de distintas naturalezas. Primero, de aquellos provenientes de los cambios gubernamentales y de las consecuentes alteraciones ideológicas y políticas en la agenda pública y en la percepción de la legitimidad y la pertinencia de intervenciones de esa naturaleza. Después, del impacto de las crisis económicas recientes que plantean estrategias revisionistas, sobre todo en relación a las inversiones dirigidas a los más pobres.

Por otro lado, parece ingenuo y poco consistente en atenerse al hecho de la mera permanencia de un conjunto de programas para afirmar algo acerca de su relevancia, eficacia o efectividad, o incluso sobre su capacidad de actuación, aunque estos factores no sean despreciables. Avanzamos, así, para dimensiones objetivas involucradas en la ejecución de una política pública:

el volumen de inversiones y la cobertura poblacional. Con base en los datos facilitados por la CEPAL, identificamos el volumen de inversiones en relación al PIB (en dólares) y también el alcance poblacional por país. Se presenta la cobertura en términos de porcentajes de población. Sin embargo, como los PTMC entienden la familia como unidad de intervención, la cantidad de personas atendidas es una estimación calculada a partir de informaciones secundarias, con procedimientos variables por país.

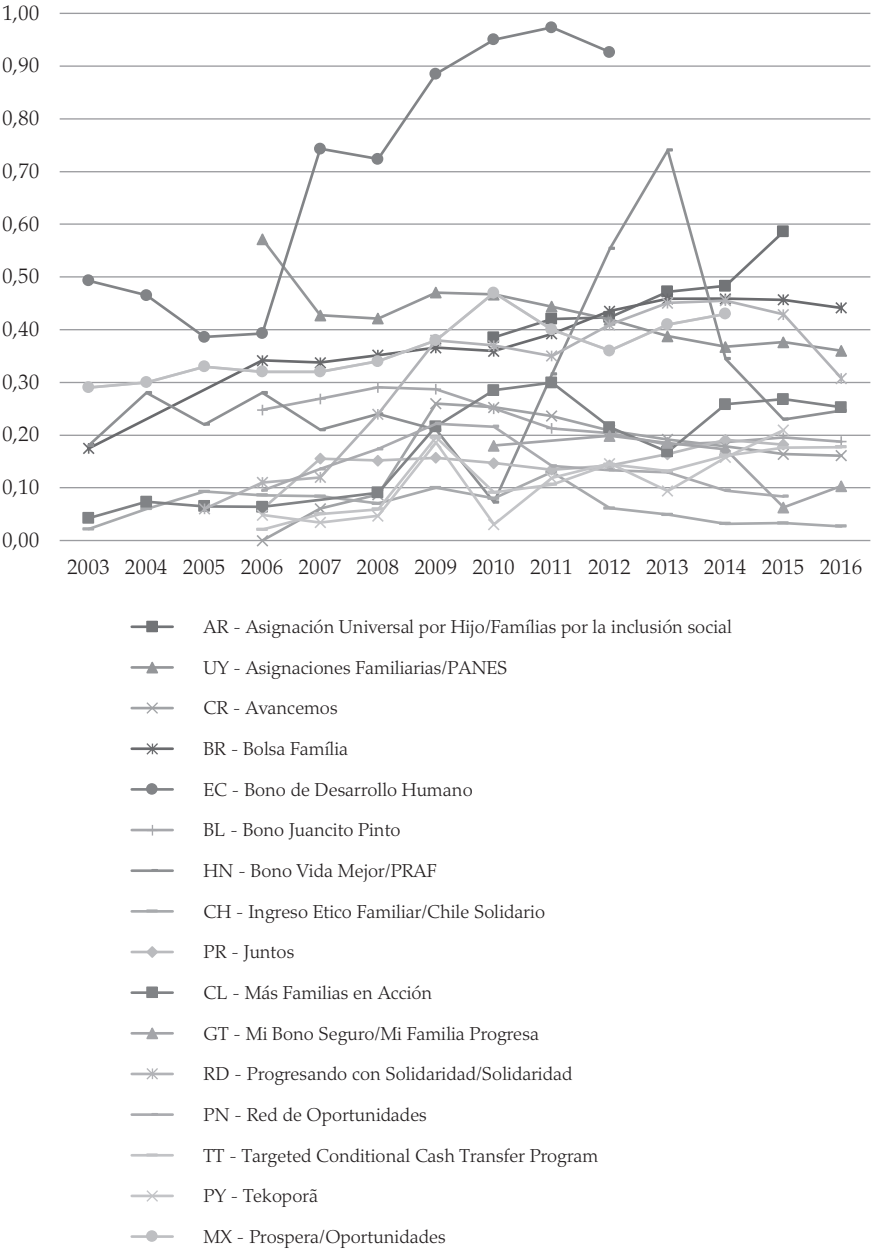
Para una mejor observación del comportamiento de esas intervenciones por país a lo largo de los años, optamos por favorecer la trayectoria histórica. Así, utilizamos también los datos de los programas ya finalizados, en los casos en que identificamos que el programa actual es una reformulación de la intervención pasada⁵. Seleccionamos un PTMC por país, especialmente el que involucraba el mayor volumen de recursos financieros y tenía la mayor cobertura.

Este gráfico nos muestra que la inversión promedio en términos porcentuales oscila entre las cifras del 0,1% al 0,4% del total del PIB de cada país. Ecuador se destaca por invertir en el programa Bono de Desarrollo Humano porcentuales variantes entre el 0,7% y el 0,97% para el período entre 2007 y 2012. La indisponibilidad de datos más recientes, sin embargo, no nos permite comprender su comportamiento más reciente.

La variación en el volumen de inversiones parece sufrir influencia de la implantación de nuevos programas, como ejemplifican Chile y Honduras. En el caso de Honduras, con la implantación del programa Ingreso Ético Familiar, la inversión se reduce a la mitad en relación a lo que era empleado en el programa anterior. En Chile, sin embargo, aunque el nuevo programa surgió como sustituto, Chile Solidario continuó en funcionamiento hasta que todas las familias recibieran los beneficios previstos cuando de su inclusión en el programa. En ese caso, como utilizamos los valores del nuevo programa, lo que identificamos fue la tendencia a una reducción futura.

5 En esa condición, se encuentran: 1) Argentina: con la adición de los datos del extinto programa Familias por la Inclusión Social (2005-2010); 2) Chile: presentamos también los datos disponibles sobre el programa Chile Solidario para el período entre 2002 y 2011; 3) Guatemala: con el programa Mi Familia Progresá (2008-2011); 4) Honduras: agregamos al programa actual Bono Vida Mejor los datos del Programa de Asignación Familiar para los años 2003 a 2009; 5) México: los datos se refieren a la ejecución de los programas Oportunidades y Prospera, para los períodos 2003-2013 y 2014-2016, respectivamente; 6) República Dominicana: utilizamos también las informaciones de los programas Solidaridad (2005-2012); 7) Uruguay: con el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES) (2005-2007).

Gráfico 1. Inversión anual en porcentaje del PIB por PTMC/País



Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe (CEPAL).

De forma agregada, observamos pequeñas oscilaciones en las inversiones, que, hasta finales de 2016, no se mostraban particularmente sensibles a los efectos de las crisis económicas o de los cambios gubernamentales y sus consecuentes cambios programáticos. Por otro lado, este escenario puede ser indicativo de la necesidad de permanencia de los PTMC, considerando que la coyuntura determinante de su demanda sigue presente, ya sea porque es o se ha vuelto refractaria al modelo empleado o porque las crisis y los cambios gubernamentales retroalimentan la propia existencia de la demanda.

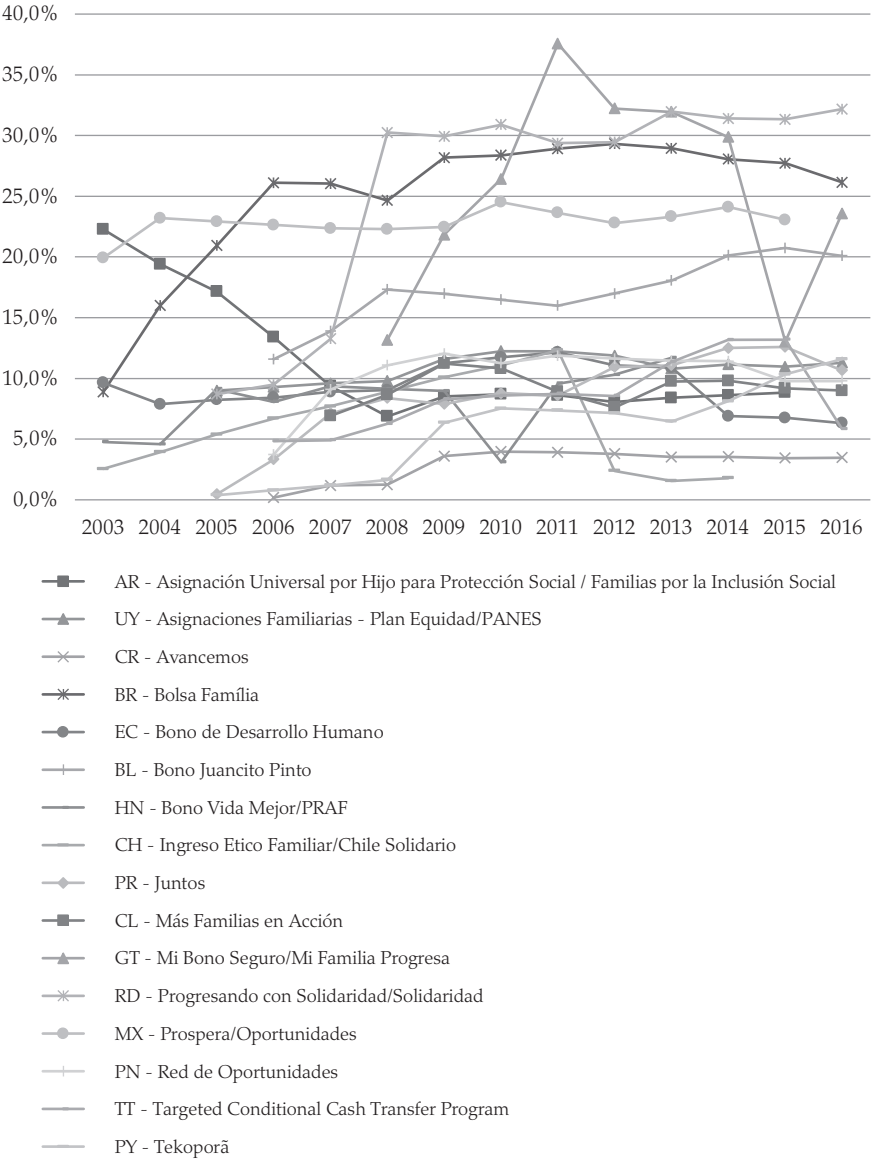
Estas hipótesis quedan más claras cuando observamos el gráfico con la cobertura de los PTMC, a partir del porcentaje poblacional. Nuevamente vemos que hay un conjunto de países que mantienen el alcance de sus PTMC en torno al 10% de la población. Hay, sin embargo, mayor dispersión y algunos países se destacan por presentar cobertura poblacional por encima de la media, igualmente constante en el tiempo. En ese grupo se encuentran México, Brasil y, en los últimos años, también la República Dominicana. Guatemala se destaca de estos grupos por la amplitud de la oscilación (entre el 15 y el 37%); y Argentina y Chile, por la reducción en la cantidad de familias atendidas.

Es importante tener conciencia de que porcentuales poblacionales similares en alguna medida se refieren a cantidades de personas bastante variables. Para mencionar algunos ejemplos, el programa *Bolsa Familia* benefició en 2016 más de 54 millones de personas, lo que representó el 26,14% de la población, mientras que la República Dominicana atendió a más del 32% de la población y alcanzó casi 3,5 millones de ciudadanas y ciudadanos.

En el Gráfico 2 podemos observar la distribución de la cobertura poblacional estimada en los últimos 15 años para los países latinoamericanos con PTMC activos actualmente.

Hasta donde los datos disponibles nos permiten afirmar, observamos que la tendencia presente aquí apunta para el mantenimiento de los PTMC, aunque ese mantenimiento es posible gracias al rediseño de los programas, como los que se han implantado a lo largo de los últimos años. De todos modos, aunque en ese escenario, podemos observar que no son expresivos – o al menos no se pueden visualizar todavía – los cambios en el sentido de la reducción de la inversión o de la cobertura en la mayor parte de los países latinoamericanos.

Gráfico 2. Cobertura de la población estimada por país/programa



Fuente: Elaboración propia a partir de la Base de datos de programas de protección social no contributiva en América Latina y el Caribe (CEPAL).

3. EVALUACIONES DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA MONETARIA: LÍMITES Y POSIBILIDADES

En el campo de las evaluaciones de políticas y programas, hay una serie de posibilidades de trabajo con finalidades distintas. La evaluación de las intervenciones públicas ha ganado creciente espacio y relevancia y ya es relativamente común que un grupo cada vez mayor de programas y políticas sea evaluado, sobre todo, con foco en la medición de sus resultados. Cuando se trata de los PTMC, la evaluación asume mayor relevancia y se ha mostrado un tema especialmente importante, en el que se invierten muchos recursos. Sobre estos programas existe una profusión de estudios bajo las más variadas perspectivas y con objetivos orientados a la evaluación de la eficiencia, de la focalización, de los resultados y también de los impactos alcanzados.

Observando los trabajos más recientes, identificamos una serie consistente de estudios que han demostrado la capacidad de los PTMC de reducir la incidencia y la brecha de la pobreza. En este grupo están también los trabajos que afirman ser los PTMC estrategias eficaces para mejorar las condiciones inmediatas de vida de la población en situación de pobreza, con mayor énfasis para aquellas que sufren el impacto directo de la dimensión monetaria (ROBLES; AZEVEDO, 2011; MOLINA-MILLAN et al., 2016).

Los PTMC han sido inequívocamente efectivos en incrementar el consumo de los hogares beneficiarios, así como en reducir la incidencia y, especialmente, la intensidad de la pobreza y la desigualdad (Fiszbein y Schady, 2009; Stampini y Tornarolli, 2012; Levy y Schady, 2013). No solamente los PTMC han aumentado el consumo, sino que también han mejorado su composición en términos de calidad y la variedad del consumo de alimentos. (IBARRARÁN et al., 2017, p. 2).

Existen también indicadores que demuestran la reducción de la incidencia de trabajo infantil (Ibid.; WORLD WITHOUT POVERTY, 2017), aunque las transferencias no son suficientes para cubrir la diferencia en la renta doméstica (ARAUJO; BOSCH; SCHADY, 2017).

Los estudios que evidencian los resultados más expresivos se sitúan en el campo de la educación. En un estudio comparado entre países de América Latina y el Caribe, la ampliación de la inserción escolar entre los beneficiarios ha variado entre el 0,5% en Jamaica y el 12,8% en Nicaragua. Este dato es particularmente importante porque dialoga con el aumento de stock de capital humano, variable presente en la teoría de cambio del programa. De forma adicional, también existen evidencias de que los PTMC contribuyen al aumento de la progresión escolar (IBARRARÁN et al., 2017). En Brasil, una de las evaluaciones del *Bolsa Família* también apuntó la competencia del programa para reducir las tasas de abandono escolar de los niños y aumentar la frecuencia entre los adolescentes de 15 a 17 años (WORLD WITHOUT POVERTY, 2017).

El programa argentino (Asignación Universal por Hijo) demostró capacidad para impactar positivamente en la matrícula de los niños y adolescentes entre 15 y 17 años. El aumento de la tasa de matrícula para ese grupo fue del 4% en el conjunto de personas beneficiadas, siendo el resultado más influenciado por los niños. Para los grupos más jóvenes, sin embargo, el programa se mostró insuficiente para incentivar la inserción escolar. Por otro lado, es un incentivo importante cuando se observa la tasa de evasión, que cayó un 4 y un 7% para los grupos entre 12-14 y 15-17 años, respectivamente. La evaluación sugiere que esos resultados fueron posibles con la alteración en el diseño del programa, que incorporó sanciones por incumplimiento de las condicionalidades educativas, la articulación con otras políticas y la creación de incentivos adicionales para el cumplimiento de etapas educativas (UNICEF et al., 2017). Otras evaluaciones también han mostrado que las condicionalidades (o corresponsabilidades) asociadas a las transferencias monetarias son importantes para aumentar los niveles escolares y la realización de exámenes preventivos de salud, vacunación y seguimiento del crecimiento entre los niños beneficiarios (ROBLES; AZEVEDO, 2011).

La inserción laboral es un tema muy discutido en el contexto de los PTMC. Se han desarrollado varios estudios para responder a un cuestionamiento frecuente relacionado con los efectos a corto plazo: ¿los PTMC crean incentivos negativos para el trabajo entre las familias beneficiarias? Los estudios han sido contundentes en la demostración de que estos efectos no

existen en la mayoría de los países investigados; en algunos países, existen en segmentos específicos de la población. Para otros países, los estudios muestran que la influencia se restringe a la preferencia por trabajos informales en detrimento de los formales, sobre todo cuando el recibimiento de la transferencia de renta está asociado a la formalidad del empleo de los beneficiarios. Un estudio realizado en Ecuador demostró que el programa local no genera desincentivo al empleo, pero tiene efecto sobre la condición de formalidad (IBARRARÁN et al., 2017). También se identificaron resultados similares en Uruguay (MEDELLÍN; IBARRARÁN; STAMPINI, 2015) e no Brasil (WORLD WITHOUT POVERTY, 2017).

Otro estudio en el que se analizaron evidencias de evaluaciones de siete PTMC en seis países, siendo tres de ellos latinoamericanos (México, Honduras y Nicaragua), afirma no haber encontrado evidencias que estos programas tienen efectos sobre la propensión al trabajo ni sobre el número de horas trabajadas para hombres o mujeres (BANERJEE et al., 2015). En 2014, dos estudios distintos sobre el programa brasileño *Bolsa Família* encontraron resultados diferentes (BARBOSA; CORSEUIL, 2014, FIRPO et al., 2014). Para uno de ellos existen efectos en la reducción de la mano de obra femenina entre las beneficiarias, mientras que para el otro el efecto de la transferencia de renta en la elección por trabajo (formal o informal) y en la cantidad de horas trabajadas es nulo. En un estudio más reciente, se concluyó que el riesgo de que una beneficiaria deje de trabajar es entre 7 y 10% menor que el de una persona no beneficiaria (SANTOS et al., 2016).

En el área de la salud, los impactos son positivos en relación al aumento del uso de los servicios preventivos y a la reducción de la mortalidad en grupos de edad específicos, especialmente con causas relacionadas con la pobreza, como la desnutrición (IBARRARÁN et al., 2017). En Brasil, entre los municipios con altas concentraciones de familias participantes del *Bolsa Família*, la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años es un 19% menor que entre los demás. Cuando limitadas las causas de mortalidad relacionadas con la pobreza, como la diarrea y la desnutrición, estos mismos municipios tienen porcentuales 53% y 65% menores, respectivamente (WORLD WITHOUT POVERTY, 2017).

Otro tipo de estudio común sobre los PTMC busca calificar su capacidad de focalización. En 2017, el programa brasileño *Bolsa Família* era el

programa social de transferencia monetaria con mejor focalización del país. Esta exactitud en la focalización también se encontraba en los programas de Chile y México (Ibid.). En Argentina, un estudio sobre el Programa Asignación Universal por Hijo también concluyó que hay un alto grado de focalización, con el 20% de las familias más pobres recibiendo cerca del 50% del total de transferencias pagadas por el programa (UNICEF et al., 2017).

Las evaluaciones sobre los PTMC son limitadas cuando el objetivo se refiere a los impactos a largo plazo. Los estudios en esta área han sido poco expresivos en el sentido de afirmar la sostenibilidad de estos cambios de vida ocasionados durante la participación en los PTMC. Es decir: los impactos todavía son poco precisos, poco evidentes o poco observables en la forma esperada cuando se proponen esos programas. En general, la evaluación de impacto a largo plazo de los programas es una tarea difícil y demanda muchos recursos. En el campo de los PTMC, la demostración de resultados se muestra más compleja en función de las restricciones metodológicas implicadas, que aportan desafíos relacionados con la falta de potencia estadística o las muchas dificultades y, en el límite, a la imposibilidad de crear grupos de control y tratamiento adecuados para la comparación entre las estrategias experimentales, por ejemplo (IBARRARÁN et al., 2017).

Aun así, una serie de estudios se desarrollan en este campo. Sus evidencias, sin embargo, son más bien caracterizadas como mixtas (TEJERINA; PIZANO, 2016) o insuficientes para afirmar que los objetivos a largo plazo han sido alcanzados. Los estudios que buscan evaluar la calidad del proceso educativo, por ejemplo, encuentran indicativos de que el aumento en los indicadores, como inserción escolar o aprobación, no fue acompañado de la mejora de los resultados de aprendizaje (IBARRARÁN et al., 2017). Es decir, el aumento de la progresión escolar no es garantía de que niños y adolescentes aprendan más mientras están en las escuelas (ARAUJO; BOSCH; SCHADY, 2017). Por lo tanto, las evidencias todavía son insuficientes para afirmar que un joven que ha acumulado más años de educación formal está accediendo en su vida adulta mejores empleos o salarios (MEDELLÍN; IBARÍN; STAMPINI, 2015).

Un análisis de la capacidad de los PTMC para ayudar a las familias a escapar de la trampa de la reproducción intergeneracional de la pobreza muestra que, después de un período (tres o seis años) participando en el

programa, las familias beneficiarias del PTMC ecuatoriano (Bono de Desarrollo Humano – BDH) presentaron resultados iguales o bastante similares a los presentados por las familias del grupo de control (no participantes). Es decir, los niños pertenecientes a familias que recibieron la transferencia monetaria no presentaron mejores resultados en la adolescencia, y los adultos jóvenes integrantes de familias beneficiarias tuvieron resultados un poco mejores en el rendimiento escolar que los del grupo de control. A largo plazo, la probabilidad de que la participación en el programa cause algún impacto en la vida de los niños y adolescentes es bastante modesto. Este resultado es particularmente importante si recordamos que Ecuador es el país que presenta el mayor nivel de inversión y paga beneficios que constan entre los más altos entre los países de América Latina, alcanzando la cifra del 20% de todo el presupuesto familiar (ARAUJO; BOSCH; SCHADY, 2017).

Otro estudio comparó los programas de México, Colombia y Nicaragua e identificó efectos positivos sobre la escolaridad y el desarrollo de habilidades cognitivas. Sin embargo, afirmó que las evidencias sobre otros resultados son inconclusas con el uso de metodologías experimentales y no experimentales (MOLINA-MILLAN et al., 2016).

De forma más amplia, hay todavía estudios que apuntan al reconocimiento de que ese tipo de programa, por sí solo, no es capaz de enfrentar estructuralmente el fenómeno, sirviendo como lenitivo para las malas condiciones de vida y no para su superación (ESPINOLA; ZIMMERMANN, 2017).

Las dificultades implicadas para evidenciar resultados sostenibles obtenidos por medio de las transferencias monetarias y los resultados poco consistentes encontrados sumados al contexto reciente de crisis económica arrojaron luz sobre las limitaciones de ese tipo de intervención como estrategia de solución sostenible para la pobreza.

Estas constataciones influyen algunos encaminamientos, que se insertan en diferentes campos de la comprensión sobre cuáles serían las soluciones más adecuadas para esos nuevos contornos de la cuestión de la pobreza. Un grupo de acciones avanza hacia la creación de soluciones coordinadas, articulando a varios actores sociales, gubernamentales o no, visando el aumento de la capacidad productiva de las familias y, así, el incremento en sus condiciones de supervivencia y la consiguiente reducción de la dependencia de las transferencias monetarias gubernamentales. Otro conjunto se dedica

a pensar mejoras dirigidas a la focalización y evaluación del cumplimiento de las condicionalidades por parte de las beneficiarias. En este campo están aptas las estrategias que buscan crear atajos para la puerta de salida de los PTMC, por medio de la vigilancia constante sobre el público beneficiario, tanto en el momento del ingreso en el programa como durante su permanencia.

La focalización en las familias más pobres forma parte de las estrategias iniciales de los PTMC. Sin embargo, la recertificación (en Brasil denominada como actualización catastral) ha ganado importancia en el campo del debate sobre la creación de estrategias de salida, siendo este un tema nuevo, ya que el objetivo inicial de los PTMC era romper con la reproducción intergeneracional de la pobreza. Este tema aún es una cuestión delicada, ya que los grupos de población son vulnerables a la pobreza de forma peculiar, con destaque para los niños, las mujeres y las comunidades rurales. Además, casi el 50% de las familias beneficiarias vive en situación de pobreza crónica (MEDELLÍN; IBARÍN; STAMPINI, 2015).

El contexto de crecimiento económico vivido por gran parte de los países latinoamericanos en la década pasada y la consiguiente ampliación de las ofertas de trabajo y empleo para las personas pobres, principalmente aquellas situadas cerca de los umbrales establecidos por los criterios de elegibilidad para los PTMC, levantaron cuestionamientos acerca de la necesidad de crear mecanismos para la exclusión de aquellas que superaron las condiciones de pobreza, incluso para que otras familias pudieran ser incluidas (IBARRARÁN et al., 2017). La pregunta debería ser, sin embargo, si la salida a ser estimulada (y considerada) es del PTMC o de la pobreza. Es importante recordar que la proporción más expresiva en la mejora de la vida de las familias beneficiarias no se debió a la participación en el PTMC, sino de otras dimensiones de la vida, como el acceso al mercado de trabajo facilitado por el crecimiento económico.

Cuando enfocamos la primera opción, la salida del propio PTMC implica esfuerzos para la creación de estrategias de evaluación periódica del mantenimiento de las condiciones de elegibilidad en la familia beneficiaria. Por otro lado, privilegiar la segunda opción inserta los PTMC necesariamente en estrategias más amplias. Algunos países han tratado esta situación de forma innovadora para el continente. En Chile, por ejemplo, se creó una bonificación pagada para las mujeres beneficiarias que consiguen un trabajo formal (MEDELLÍN; IBARÍN; STAMPINI, 2015). De todas formas, esas estrategias

se dan de forma articulada con otras acciones, capaces de potenciar ese efecto – tema que será mejor abordado en la sección siguiente.

4. LA INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA MONETARIA CON OTROS PROGRAMAS

Una tendencia bastante presente identificada entre los PTMC en la actualidad es la de articulación con otras acciones, otros programas, otros sectores y otras estrategias gubernamentales o no. Se asiste al reconocimiento de la insuficiencia de este tipo de programa para la reducción sostenible de la pobreza y, a continuación, al intento de construir una solución ampliada, capaz de involucrar líneas de acción con potencial para impactar en la inserción laboral y en la generación de ingresos para las familias pobres.

Cuando hablamos de esta tendencia, no estamos desconsiderando que, desde el principio, para los PTMC que establecen condicionalidades para las familias beneficiarias, el propio diseño de implementación determinó la necesidad de algún nivel de coordinación, principalmente respecto a las acciones relacionadas a la evaluación de resultados y la frecuencia de educación y registros de seguimiento de las condiciones de salud (IBARRARÁN et al., 2017).

De hecho, aunque existan registros de construcción de estrategias de articulación entre sectores para el funcionamiento de los PTMC, el potencial de los PTMC en ese sentido todavía es poco aprovechado. La promoción de coordinación con otros sectores y la creación de una sinergia capaz de movilizar la intervención estatal de forma amplia para la promoción de ofertas cualitativamente mejores se han planteado como dos de los grandes desafíos para el futuro de los PTMC (Ibid.). Algunas iniciativas en este sentido han sido propuestas y desarrolladas.

Además, las articulaciones para las que queremos llamar la atención están en el campo de la inserción productiva de las familias. El programa mexicano Prospera, por ejemplo, incluyó en su diseño cuatro líneas de trabajo por medio de las cuales se busca coordinar y vincular acciones que extrapolan el alcance inicial de programas de transferencia monetaria y alcanzan temas como la inclusión financiera y el incremento de las capacidades productivas domiciliarias y de la propia inclusión profesional

y productiva. La realización de esas acciones es la nueva condición para la inclusión social de las familias pobres (Ibid., 2018).

En Chile, el Programa Familias ofrece acompañamiento psicosocial y sociolaboral para las familias incluidas en el programa. Las sesiones de acompañamiento psicosocial tienen como objetivo promover el desarrollo de habilidades y capacidades para la inclusión social y el desarrollo autónomo. Son 19 sesiones a lo largo de los 24 meses de intervención con la familia. Además, este eje también tiene como finalidad vincular a los beneficiarios a los servicios sociales responsables por atender demandas en las áreas de educación, salud, vivienda, empleo, formación profesional y talleres de dinámica familiar. El seguimiento sociolaboral pretende aumentar la capacidad de generación de ingresos autónomos en los adultos, tanto por medio de la creación de micro emprendimientos como de la inserción en el mercado de trabajo, con la mejora de sus condiciones de empleabilidad (VARGAS; CUEVA; MEDELLÍN, 2017).

En Brasil, en 2011, se lanzó el programa *Brasil Sem Miséria* con tres pilares de actuación: garantía de renta, acceso a los servicios públicos e inclusión productiva. La inclusión productiva tenía como objetivo aumentar las capacidades y oportunidades de trabajo de las familias, así como crear estrategias para la generación de ingresos para las familias en los medios urbano y rural. El pilar de la garantía de renta contaba con el *Programa Bolsa Família* y con otros dos programas⁶. El eje de acceso a servicios articulaba programas de salud, educación y asistencia social, en los moldes de lo que ya se practicaba en el ámbito del PBF hasta entonces. La gran novedad del programa se debe al eje de inclusión productiva. Para la ejecución de esas acciones participaron los ministerios de Desarrollo Social, Educación, Desarrollo Agrario, Integración Nacional y Medio Ambiente. Las actividades involucraban la promoción de cursos de cualificación profesional, microcrédito, asistencia técnica para el medio rural, así como acceso al agua y a los mercados públicos, a través de programas como el *Água Para Todos* y el *Programa de Aquisição de Alimentos*. La mayor parte de estas acciones ya existía y estaba en funcionamiento. Lo

6 Uno de ellos era el BPC – *Benefício de Prestação Continuada*. Creado a través de la Ley Orgánica de la Asistencia Social, en 1993, el BPC garantiza el pago de un salario mínimo para personas con discapacidad y ancianas que vivan en familias con ingresos familiares per cápita mensuales de hasta un cuarto del salario mínimo (BRASIL, 1993). *Brasil Carinhoso* fue un programa creado para sacar de la miseria a las familias con niños de hasta 15 años de edad, por medio de la transferencia de renta, pagada a las familias junto con el PBF.

que se creó de nuevo fue la gran capacidad de articulación entre las acciones, permitiendo que 22 millones de personas superasen la pobreza extrema y más de un millón de personas se matriculasen en cursos del Pronatec, después de dos años de ejecución del programa (MONTAGNER; MULLER, 2015).

La Tabla 2 a continuación presenta un breve resumen de las estrategias de salida desarrolladas en algunos países latinoamericanos actualmente. Como es posible observar, las proposiciones se concentran en el campo de la inserción productiva en el mercado formal o autónomo. Ecuador es el único país a ofrecer únicamente el microcrédito para las familias, acción que se da de forma articulada en los demás países que utilizan esa alternativa.

Tabla 2. Programas de transferencia monetaria condicionada por estrategia de salida

Programa	Estrategia de salida
CL: Ingreso Ético Familiar	Emprendedorismo
PR: Juntos	Programa Mi Chacra Emprendedora Transferencia de bien productivos (semillas, fertilizantes, ganado) y entrenamiento de habilidades
BR: <i>Bolsa Família</i>	<i>Programa Brasil Sem Miséria:</i> Urbana: Microcrédito y fondos para iniciar negocios Rural: Entrenamiento de habilidades, transferencias de tecnología (semillas, fertilizantes), vinculación con mercados y contratos públicos.
RD: Progresando con Solidaridad	Emprendedorismo, entrenamiento y microcrédito.
EC: Bono de Desarrollo Humano	Microcrédito
ES: Comunidades Solidarias	Urbana: Emprendedorismo, entrenamiento de habilidades, trabajo comunitario, incentivo económico condicional. Rural: entrenamiento de habilidades, acceso a bienes productivos, fortalecimiento de vínculos con los mercados locales.
MX: Prospera	Varios programas: Entrenamiento de habilidades, emprendedorismo, vinculaciones al mercado, crédito.

Fuente: Adaptado de Medellín, Ibararán y Stampini (2015).

El riesgo de este tipo de articulación es transitar de programas emblemáticos de reducción de la pobreza, como han sido considerados los PTMC, para otros con carácter igualmente transitorios, sin responsabilizarse de

establecer políticas permanentes, estables y capaces de mantener la pobreza bajo control. Además, es necesario cambiar la perspectiva y fortalecer la acción de la asistencia social y focalizar el desarrollo humano y la creación de oportunidades para que las inclusiones sociales y económicas alcanzadas sean sostenibles (BARRIENTOS, 2013).

5. CONSIDERACIONES FINALES

La implementación de PTMC es, desde su propuesta inicial hace más de 20 años, un desafío en muchos aspectos. La gestión es compleja, pues pone en marcha todo un conjunto de acciones que implica la creación de criterios de elegibilidad, permanencia y transferencia de recursos, pasando por la identificación e inclusión del público, por la verificación del cumplimiento de las condicionalidades y por la efectividad del pago para cientos de miles o millones de personas. La implementación cotidiana también implica la complejidad en la coordinación de ministerios, servicios y equipamientos públicos y, en algunos países, también de administraciones municipales para el acceso a la educación y la salud, para la ejecución de procedimientos de chequeo y para la garantía de que las familias más pobres permanecerán en el programa y podrán a largo plazo disponer de recursos que les permitan romper con el ciclo de reproducción de la pobreza (IBARRARÁN et al., 2017).

Las evaluaciones de estos programas son frecuentes y variadas y actualmente ya han constituido algunos puntos pacíficos acerca de sus efectos. Estos puntos se refieren a la capacidad de los PTMC para aumentar la frecuencia y el nivel de escolaridad de niños y adolescentes en prácticamente todos los países latinoamericanos. Sin embargo, son ambiguos los resultados que evidencian impactos positivos y sostenibles a largo plazo en la vida de las personas, sobre todo en lo que se refiere al rompimiento de la reproducción generacional de la pobreza. A pesar de que es posible hacer una serie de cuestionamientos acerca de las metodologías empleadas y de las propias posibilidades de evaluación empírica de algo tan complejo y multiforme, la narrativa construida ha evidenciado la poca efectividad en el rompimiento del ciclo generacional de la pobreza, en la posibilidad de viabilizar mejores inserciones profesionales futuras para los niños y

adolescentes beneficiados o incluso en la mejora en los niveles de aprendizajes por ellos obtenidos.

Influenciada por esa constatación y por el reconocimiento de los límites de los PTMC en resolver solos la cuestión, se han diseminado estrategias que buscan articular acciones capaces de juntas romper con la transmisión intergeneracional de la pobreza. Sin embargo, las soluciones sostenibles deben ser visceralmente conectadas al desempeño del mercado de trabajo, con la productividad de los empleos por él generados y con las posibilidades creadas para la inserción de la población pobre, dimensiones fundamentales aún desconectadas del debate de la superación de la pobreza.

El reconocimiento de los límites de los PTMC no debe confundirse, sin embargo, con su incapacidad para generar resultados. Estos programas hacen muy bien lo que les corresponde: crean condiciones para el aumento de capital humano entre las familias pobres y mejoran las condiciones de vida inmediata. Cabe resaltar que algunos de sus resultados están comprometidos por la calidad y la insuficiencia de la oferta de los servicios de salud y educación.

Hasta hace poco, extrapolaba el alcance directo de las responsabilidades de los PTMC la necesidad de revisar la calidad en la oferta de servicios o incluso la creación de estrategias relacionadas directamente a la capacidad y a la inserción productiva de las familias beneficiadas. La tendencia es que los PTMC sean cada vez más instados a avanzar en ese sentido y sean alzados a la condición de articuladores de esos cambios.

Sin embargo, es una estrategia temeraria, especialmente si no se inserta en el campo del reconocimiento de la crisis de los sistemas de protección social y de la necesidad de centrar el debate sobre la pobreza hacia el campo de la desigualdad social, avanzando hacia estrategias que contemplan la multidimensionalidad de la pobreza y la abordan de forma realmente sistémica y articulada.

REFERENCIAS

ARAUJO, M. C.; BOSCH, M.; SCHADY, N. ¿Pueden las transferencias monetarias ayudar a que los hogares escapen de una trampa intergeneracional de pobreza? **Documento de trabajo del BID**, n. 767, fev. 2017.

BANERJEE et al. Debunking the Stereotype of the Lazy Welfare Recipient: Evidence from Cash Transfer Programs Worldwide. **HKS Working Paper**, n. 076, dez. 2015.

BARBOSA, A. L. N. de H.; CORSEUIL, C. H. L. Bolsa Família, Escolha Ocupacional e Informalidade no Brasil. In: CAMPELLO, T.; NERI, M. **Programa Bolsa Família: uma década de inclusão e cidadania**. Brasília: Ipea, 2013.

BARRIENTOS, A. Transferencia de Ingresos para el Desarrollo Humano a Largo Plazo. Centro Internacional de Políticas para el Crecimiento Inclusivo. **One Pager**, n. 224, nov. 2013.

BRASIL. **Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)**. Brasília, DF: 7 de dezembro de 1993.

CEPAL. **Panorama Social de América Latina, 2017**. Santiago: Nações Unidas, 2018.

ESPÍNOLA, G. M.; ZIMMERMANN, C. R. As transferências condicionadas de renda na América Latina: lenitivos para a pobreza? **Revista Katálisis**, Florianópolis, v. 21, n. 1, p. 55-65, jan./abr. 2018.

FIRPO, S. et al. Evidence of Eligibility Manipulation for Conditional Cash Transfer Programs. **EconomiA**, v. 15, n. 3, p. 243-60, 2014.

IBARRARÁN, P. et al. **Así funcionan las transferencias condicionadas**: Buenas prácticas a 20 años de implementación. Banco Interamericano de Desarrollo, 2017. Disponível em: <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8159/Asi-funcionan-las-transferencias-condicionadas.PDF?sequence=7>. Acesso em: 08 ago. 2018.

MAGRO, A. F. do N.; REIS, C. N. dos. Os Programas de Transferência de Renda na América Latina: panorama de experiências em desenvolvimento. **Revista académica**, editada y mantenida por el Grupo EUMED.NET de la Universidad de Málaga, año 5, n. 10, jun. 2011.

MEDELLÍN, N. et al. Hacia adelante: Recertificación y estrategias de salida en los programas de transferencias monetarias condicionadas. **Monografía del BID**, n. 348, 2015.

MOLINA-MILLAN, T. et al. Long-term impacts of conditional cash transfers in Latin America: review of the evidence. Inter-American Development Bank. **Working Paper Series**, n. 732, out. 2016.

MONTAGNER, P.; MULLER, L. H. (Orgs.). Inclusão Produtiva Urbana: O Que Fez o PRONATEC/Bolsa Formação entre 2011 e 2014. **Cadernos de Estudos Desen-**

volvimento Social em Debate, Brasília, n. 24, 2015. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ministério da Educação.

PASE, H. L.; CORBO, C. As políticas públicas de transferência direta de renda na América Latina: uma análise de política comparada. **JURIS**, Rio Grande, v. 24, p. 265-289, 2015.

ROBLES, M.; AZEVEDO, V. **Identificación de beneficiarios de Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC)**. Banco Interamericano de Desarrollo. Sector de Conocimiento y Aprendizaje. Nota de Política, abril 2011.

SANTOS, D. B. et al. Os efeitos do Programa Bolsa Família sobre a duração do emprego formal das pessoas pobres. **Discussion Paper** n. 5, 2016. FGV/EAESP.

SOUSA, S. de M. P. S. Dimensões qualificadoras dos Programas de Transferência de Renda na América Latina e Caribe. **Textos & Contextos**, Porto Alegre, v. 14, n. 2, p. 327 - 337, ago./dez. 2015.

TEBALDI, R.; ESSER, A.; DAVIDSEN, A. D. **Promoção de resultados sensíveis ao gênero e às crianças em programas de transferência de renda**: uma análise de diferentes estratégias na administração de programas. Brasília: Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo. Research Brief, n. 61, nov. 2017.

TEJERINA, L.; PIZANO, V. **Programas de transferencias monetarias condicionadas e inclusión financiera**. Nota técnica IDB-TN, n. 1140, 2016.

UNICEF et al. **Análisis y propuestas de mejoras para ampliar la Asignación Universal por Hijo 2017**. Argentina: UNICEF, ANSES, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Consejo de Coordinación de Políticas Sociales, dez. 2017.

VARGAS, L. H.; CUEVA, P.; MEDELLÍN, N. ¿Cómo funciona Ingreso Ético Familiar?: mejores prácticas en la implementación de Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas en América Latina y el Caribe. **Nota técnica IDB-TN**, n. 1163, 2017.

VIVES, J. L. **Tratado del socorro de los pobres**. Valencia: Imprenta de Benito Monfort, 1992. Ed. original: 1781.

WORLD WITHOUT POVERTY. Brazil Learning Initiative. **Impacts of the Bolsa Familia Program (BFP)**. Set. 2017. Disponível em: <https://wwp.org.br/wp-content/uploads/25.-Impacts-of-the-BFP.pdf>. Acesso em: 03 set. 2018.